

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN VENEZUELA: LA RESPUESTA INSTITUCIONAL

Elida Aponte Sánchez

Coordinadora de Los Estudios de Género

Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad del Zulia

Coordinadora General de la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU)

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN.- II. VENEZUELA VIVE UN TIEMPO EXCEPCIONAL DENOMINADO REVOLUCIÓN.- III. LA CONSTITUCIÓN DE 1999 COMO PUERTA DE ENTRADA DEL FEMINISMO Y DE LAS MUJERES, A LA NUEVA REPÚBLICA.- IV. ¿CÓMO LLEGAMOS A LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA?.- V. NUDOS GORDIANOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: 1. Las instituciones comprometidas con la vigencia de la Ley no han asumido las obligaciones que les impone el Capítulo IV de la misma. 2. El posicionamiento teórico pertinente: feminismo, feminismo y más feminismo. 3. El flagelo de la corrupción utiliza todos sus recursos. 4. Una corriente doctrinaria peligrosa.- VI. CONCLUSIÓN.

PALABRAS CLAVE

Mujeres; Hombres; Estado; Violencia; Machismo; Feminismo; Democracia; Venezuela.

RESUMEN

Cuando referimos la problemática de la violencia contra las mujeres, sobre todo si nuestra formación es jurídica, tenemos la tendencia a confrontar el ordenamiento jurídico vigente con el contenido de los actos y las sentencias que emanan de los órganos de denuncia, de investigación y de jurisdicción. Sin embargo, el trabajo con las mujeres de la comunidad, con las redes que se encargan de dar asesoría y acompañamiento a las víctimas en procura de la justicia, la relación irremplazable con la mujer

de a pie, usuaria actual o potencial del entramado institucional creado, las estadísticas que arrojan algunos órganos implicados con la materia, nos brindan otra visión. Esta visión trasciende el tema meramente jurídico para ubicarnos en el ámbito político y, especialmente, en el tema del poder, dándonos herramientas para detectar los anclajes del patriarcado en su empeño de fortalecer la impunidad o, revelándonos, tal vez, que es contra el escenario del poder y sus desviaciones, que se debe confrontar la problemática que nos ocupa para poder entender cuánto hemos avanzado o no, en el tema de la violencia contra las mujeres, en un país determinado; en este caso, en Venezuela, y el modelo de democracia que exhibe al mundo.

I. INTRODUCCIÓN

El tema de la discriminación de las mujeres en América Latina sigue presente¹ en los reclamos de las organizaciones de mujeres y en los foros internacionales. En todos los ámbitos del quehacer nacional nos encontramos con una debilidad estructural en nuestros Estados, y es que las mujeres no logran consolidar el ejercicio de la soberanía que como pueblo les pertenece. Somos las constituidas no las constituyentes.

Las nuevas agendas *revolucionarias* de algunos de estos países, tales como: Venezuela, Bolivia y Ecuador, habiendo refundado sus pactos políticos por medio de nuevas Constituciones según el ejemplo inaugural venezolano, insisten en la proclamación de unas democracias participativas y protagónicas, fundadas en la igualdad concreta o material de las mujeres y los hombres y, no sólo, en la igualdad formal; opuestas a las democracias representativas, experimentadas durante el siglo veinte.

Estas revoluciones emergentes, con ánimo de sumar la mayor cantidad de voluntades han reivindicado los derechos de los sectores olvidados y discriminados históricamente: los pueblos indígenas, las personas de la tercera edad, las niñas y los niños, la juventud y las mujeres. Con la aclaratoria, decimos, que nosotras no representamos una minoría. En la República Bolivariana de Venezuela somos el 50.3% de la población, según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística².

¹ Yo diría que en aumento cada día.

² www.ine.gob.ve. Nosotras consideramos que el porcentaje es mayor si tomamos en cuenta lo expresado por Elías Eljuri, Presidente del Instituto, quien afirma en la página oficial del organismo que muchos hogares se negaron a prestar información al personal que realizó el

II. VENEZUELA VIVE UN TIEMPO EXCEPCIONAL DENOMINADO REVOLUCIÓN

Hace años hice una pasantía breve en Sevilla y tuve la oportunidad de pernoctar en la Biblioteca de Estudios Hispanoamericanos. Durante la pasantía conocí a una profesora cubana quien en una comparación sencilla me explicaba la diferencia entre su cotidianidad y la mía. Afirmaba que tal diferencia estribaba en que mientras para mí los días estaban dedicados a la vivencia, los de ella estaban dedicados a la sobrevivencia. Y creo que no hay un mejor ejemplo para describir los cambios de los tiempos, que no dependen en absoluto de nuestras voluntades ni de la bitácora vital que nos hayamos propuesto. Las mujeres víctimas de violencia, no importa el país en el cual se encuentren, tienen los días ocupados en sobrevivir.

Venezuela, desde el año 1998, inició una experiencia política que ha cambiado enormemente todo el entramado del poder³ y, con él, las interrelaciones humanas. Un nuevo grupo llamado a sí mismo Movimiento Bolivariano 200, el que acompañó la intentona golpista (1992) contra el expresidente constitucional Carlos Andrés Pérez, accedió al poder en las elecciones de 1998, por el voto popular y soberano, resultando electo el, hoy reelegido Presidente y Teniente Coronel del Ejército ®, Hugo Chávez Frías.

Ayudado por una sentencia de la Sala Constitucional del 19 de enero de 1999⁴ y otras actuaciones del poder constituido que resultó electo en las mismas elecciones de diciembre de 1998, Chávez cumplió la oferta electoral central que blandió como candidato y era la de llamar a una asamblea nacional constituyente para aprobar una nueva Constitución, que refundara la República. Esta había vivido durante cuarenta años (1958-1998) la democracia de los partidos, con las carencias e insatisfacciones populares que alimentaron un cambio tan radical de ruta.

Debo decir con absoluto apego a la verdad que la llegada al poder, por vía electoral, del Presidente Hugo Chávez Frías, fue un hecho inevitable, desprestigiados como estaban los partidos del estatus y la presencia de problemas tan graves como una pobreza que superaba el 60%, una corrupción galopante y la ayuda poderosa de los medios de comunicación del estatus.

censo y visitó sus hogares.

³ E. Aponte Sánchez, "La Revolución. Prolegómenos", *Revista FRÓNESIS*, vol. 10, n° 3, Instituto de Filosofía del Derecho, Maracaibo, 2003, pp. 57-73.

⁴ De la cual fue ponente el Magistrado Humberto La Roche, quien fuera mi profesor de Derecho Constitucional en pregrado de Derecho, en la Universidad del Zulia y con quien sostuve una bonita amistad.

La Asamblea Nacional Constituyente en un período aproximado de cuatro meses produjo una nueva Constitución, que fue aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1998. Durante la Asamblea, las mujeres feministas, organizadas o no, los Estudios de Género de las distintas Universidades, las organizaciones populares de mujeres, las redes de mujeres y otras plataformas, unimos esfuerzos para que la Constitución nos visibilizara en el lenguaje (primer instrumento de discriminación contra las mujeres) y en el Título III, donde se consagraran nuestros derechos humanos; asumiendo los enormes avances ya aprobados según instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW-ONU)⁵ y su Protocolo Facultativo, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará (OEA)⁶.

Dicho en otras palabras, la Constitución de 1999 significó el paso del Estado de Derecho contenido en la Constitución de 1961, al Estado Constitucional o Estado de los derechos humanos. Eso en la letra porque en la práctica muchas aporías y contradicciones podrían anotarse.

Y cuando afirmamos que en Venezuela vivimos actualmente un tiempo excepcional lo decimos porque la revolución que preside el Presidente Hugo Chávez Frías, denominada *bolivariana*, imitada en otros países como Bolivia y Ecuador, se instala en el poder no como el resultado de una gran conmoción popular⁷, sino a través de un proceso constituyente y con la colaboración de los poderes públicos constituidos.

De tal manera que la revolución, en un primer momento se transformó en asamblea nacional constituyente⁸ y, ésta, en artículos de la nueva Constitución. Desde ese momento, la revolución liderada por el Presidente Hugo Chávez Frías, se concibe como un sistema engranado de previsiones constitucionales y legales, provenientes de la Asamblea Nacional por la vía regular, y leyes habilitantes que le han dado la posibilidad de legislar en materias trascendentes para la vida nacional, todas orientadas a partir del año 2007 a la construcción y consolidación del socialismo del siglo XXI, que en palabras de Fidel Castro⁹, es el comunismo. La discusión sobre

⁵ Venezuela firmó su adhesión a la CEDAW en 1980 y en 1982, el extinto Congreso Nacional –hoy Asamblea Nacional–, la hizo ley. En el año 2000, nuestro país firma el Protocolo Facultativo de Seguimiento.

⁶ En el año 1995, el extinto Congreso Nacional de Venezuela, hoy Asamblea Nacional, sancionó la Ley Aprobatoria de dicha Convención.

⁷ Al estilo de la Revolución Francesa y de otras revoluciones en el mundo.

⁸ De hecho, en la campaña electoral del candidato Chávez, de 1998, nadie mencionaba la palabra revolución y mucho menos, socialismo.

⁹ Quien en una entrevista que le realizara en Cuba el 10 de septiembre de 2010, la periodista

si el desempeño de la revolución venezolana es democrático o no, no nos ocupa en la presente contribución.

De cualquier manera, la Constitución venezolana reivindica una democracia participativa y protagónica, y nosotras creemos con Dahl¹⁰ que, cualquiera sea el adjetivo o los adjetivos que se utilicen, toda democracia supone unos mínimos, a saber: a) la aceptación de la oposición política y el derecho de cualquier persona o grupo a desafiar o sustituir, por elecciones, a quienes detentan los puestos de poder, b) la existencia de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, con participación paritaria de los hombres y las mujeres que las integren, con programas e ideologías distintas a la ideología que detenta el poder, c) la libertad de expresión y de asociación, y el respeto a la independencia de los medios de comunicación, y d) el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas, especialmente de las minorías. Estos mínimos se han puesto en duda en la cotidianidad política venezolana, no sólo por sectores de la oposición sino ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA).

Resumiendo, podemos decir que, en Venezuela, avanza una revolución que se ha autodefinido como bolivariana y socialista, ello es, comunista, en palabras de Fidel Castro¹¹.

III. LA CONSTITUCIÓN DE 1999 COMO PUERTA DE ENTRADA DEL FEMINISMO Y DE LAS MUJERES, A LA NUEVA REPÚBLICA

El Movimiento de Mujeres de Venezuela, representado por distintos grupos y organizaciones de mujeres, en el cual confluyeron tanto tendencias liberales como socialdemócratas, entendió la importancia de la oportunidad constituyente de 1999, para consagrar en la nueva Constitución, los reclamos que venían siendo reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres. La Asamblea Nacional Constituyente se constituyó así en una experiencia inédita para las mujeres feministas que miramos a la Constitución como el instrumento que permite lograr la organización política y jurídica de la sociedad, sobre el fundamento de la igualdad con paridad, la libertad y

venezolana Vanessa Davies, transmitida en Venezuela por el canal oficial de Televisión "Venezolana de Televisión", esta le preguntó: "¿Qué es el socialismo del siglo XXI?, y Fidel Castro le contestó: "Comunismo".

¹⁰ R. Dahl, *La democracia y sus críticos*, Paidós, Barcelona, 1993, p. 28.

¹¹ Tratado por el Presidente Hugo Chávez Frías como su padre político.

los otros derechos humanos de las mujeres y los hombres. Derechos que son inescindibles e interdependientes, en los términos del artículo 19 del mismo texto constitucional.

Claro, los aportes que las mujeres feministas llevamos al seno de la Asamblea Nacional constituyente y que fueron recogidos en el texto constitucional, no deben hacernos olvidar que la Constitución es un instrumento de gobierno, lo que sugiere la idea de una clase sexual gobernante (los hombres), que utiliza el máximo instrumento jurídico como instrumento del poder que ejerce sobre otra clase sexual gobernada (las mujeres).

La Constitución venezolana de 1999 visibiliza a las mujeres como sujetas políticas¹², como ciudadanas por medio del lenguaje, primeramente. Sin que nos sea permitido afirmar que por acción de la misma y de la consagración del Título III que remite a nuestros derechos humanos, seamos tratadas y reconocidas como integrantes del poder constituyente. El pueblo mujer, lo he expuesto y argumentado en varios de mis libros y artículos, es un pueblo excluido. De allí la importancia de deconstruir el discurso político tradicional y el sexismo guardado en sus sótanos.

No es el objeto de este aporte revisar los avances constitucionales¹³ que hacían de la Constitución venezolana de 1999, de cara a los derechos humanos de las mujeres, la más avanzada de América Latina¹⁴, pero sí es importante tener presente que ella abre un abanico de posibilidades para la concreción de los mismos. Ello se logra, si a la consagración de dichos derechos, le sigue el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, suficientemente asertivas y que sean medidos sus resultados con los indicadores pertinentes.

Ahora bien, cuando en Venezuela aprobamos la Constitución de 1999, otras leyes estaban en vigencia, relacionadas directamente con nuestros derechos humanos: la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, la Ley Aprobatoria de la CEDAW, la Ley Aprobatoria de la Convención de Belém do Pará, la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, el Título VI de la Ley Orgánica del Trabajo, todas aprobadas como resultado de las

¹² Sobre nuestra incorporación al espacio público recomiendo la tesis doctoral presentada por Laura Nuño Gómez, cuyo título es: *La incorporación de las mujeres al espacio público y la ruptura parcial de la división sexual del trabajo: el tratamiento de la conciliación de la vida familiar y laboral y sus consecuencias en la igualdad de género*, Universidad Complutense de Madrid, Octubre de 2008. Puede ser consultada en <http://eprints.ucm.es/8836/1/T30855.pdf>. Consulta el 20 de enero de 2012.

¹³ E. Aponte Sánchez, "La Revolución Bolivariana de Venezuela y las mujeres", en M.L. Femenías (Comp.), *Perfiles del Feminismo Iberoamericano*, Editorial Catálogos, Buenos Aires, 2005, pp. 145-154.

¹⁴ Hoy es superada por las Constituciones de Bolivia y Ecuador.

luchas de las mujeres y de la estrategia implementada¹⁵ por la Comisión Bicameral para los Derechos de La Mujer que estaba integrada por las Diputadas y la Senadoras del extinto Congreso Nacional, denominado hoy, Asamblea Nacional, órgano unicameral integrado solo por Diputados y Diputadas.

Además existía el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)¹⁶, creado por el Presidente Hugo Chávez según Decreto, el 26 de octubre de 1999. El INAMUJER es una institución que se deriva de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, en reemplazo de lo que se denominó el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU).

El salto cualitativo en materia legislativa se da con la Constitución de 1999, al estar anclada en la igualdad, no sólo formal sino material; lo que exige, estar adminiculada a la paridad de las mujeres y los hombres, en el marco de una sociedad democrática, participativa y protagónica (Preámbulo de la Constitución).

IV. ¿CÓMO LLEGAMOS A LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA?

En relación a la violencia contra las mujeres en Venezuela, el primer instrumento legal que la abordó fue la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, vigente desde el año 1998, y que fue aprobada con el objetivo de prevenir, sancionar, eliminar y erradicar la violencia machista, así como proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas. Para el momento de la entrada en vigencia de esta ley especial, como dijéramos en un párrafo anterior, Venezuela había suscrito y aprobado la Convención de Belém Do Pará, texto normativo de enorme y trascendente importancia, sobre la materia. Sin embargo, la Ley no era acatada. Las mujeres venezolanas afrontaban los embates de una sociedad prejuiciada y sexista que, ajena al tema de sus derechos humanos, insistía en considerar que *en los problemas de marido y mujer, nadie se debía meter o que los trapos sucios se lavaban en casa*.

El asunto de la impunidad de los delitos de violencia contra las mujeres y su indefensión frente el sujeto agresor, con la complicidad e indiferencia de un Estado patriarcal, se agravó a raíz de un Recurso de

¹⁵ Estrategia fundada en la sororidad legislativa.

¹⁶ El Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) fue, hasta la creación del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (Gaceta Oficial el 13 de abril de 2009), el ente rector de las políticas públicas a favor de las mujeres.

Inconstitucionalidad e Ilegalidad Parcial que el Fiscal General de la República intentó contra varios artículos de la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia y, especialmente, contra las medidas cautelares contenidas en el numeral 2, 3 y 5 del artículo 39. Ello es, contra la orden de salida del hombre agresor de la residencia común, contra el arresto transitorio hasta por setenta y dos horas que se cumpliría en la jefatura civil respectiva, y contra la prohibición del acercamiento del hombre agresor al lugar de trabajo o estudio de la víctima, que –según el fiscal- no podían ser acordadas por los órganos administrativos mencionados en la Ley (art. 32), sin la participación de la parte agresora en el procedimiento¹⁷.

La Sentencia fue favorable al Recurso Fiscal pero lo que en apariencia parecía un enorme fracaso, las mujeres lo convertimos en un salto adelante, cuando, con el apoyo de las organizaciones de mujeres, Áreas de Estudios de las Mujeres o estudios de género de las distintas universidades y liderazgos como el de María León¹⁸, compartiendo manifestaciones multitudinarias en la calle (una de ellas a las puertas del mismo Tribunal Supremo de Justicia) y desde el Instituto Nacional de la Mujer que ella presidía, logramos constituir una comisión integrada por dicho Instituto, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de los Derechos de la Mujer, la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU) y la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional; comisión que diseñó un anteproyecto de Ley que fue el antecedente de lo que es hoy la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es, en el ordenamiento jurídico venezolano¹⁹, una ley innovadora. Entre otros aspectos, porque rompe con la dicotomía público-privado y hace de los delitos de violencia contra las mujeres, delitos de acción pública, lo que la caracteriza como más progresista, incluso, que algunas leyes vigentes sobre la materia, en otros países.

La superación de la dicotomía anotada amplía, indiscutiblemente, los estrechos límites de lo político, como un esfuerzo crítico del feminismo y

¹⁷ En este Recurso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nos hicimos parte en nombre de la Red Venezolana sobre Violencia contra las Mujeres (REVIMU), lo que fue recogido en la publicación: E. Aponte Sánchez, *Violencia contra las Mujeres: hacia la igualdad material o justicia. Reflexiones, publicado por la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer*, Ediciones Astrodata, Caracas, 2004.

¹⁸ Ex guerrillera de la década de los años sesenta del siglo veinte y funcionaria connotada e influyente del gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías.

¹⁹ M. Camacaro, “El discurso y la praxis médica-obstétrica: otra cara de la violencia contra las mujeres”, en A. Delagod y M. Camacaro (coord.), *La Académica en sintonía de género... una discusión impostergable*, Universidad de Carabobo, Valencia, 2010, pp. 191 ss.

que se resume en la expresión archiconocida: lo personal es político.

Además y esto es de suma importancia, contrario a quienes opinan que la ley es excesivamente represiva y punitiva –muestra clara que no la han leído con los lentes apropiados–, la misma Ley es concebida como una respuesta integral a la violencia machista o sexista. Una violencia que muchas estudiosas feministas han comenzado a denominar: “terrorismo machista”.

A partir de la entrada en vigencia de la ley, las mujeres feministas y los hombres concienciados, hemos puesto sobre el asador nuestras más comprometidas voluntades y militancias, en aras de promover su objetivo central, que a la letra dice: *“Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica”*. Sin embargo, la realidad nos dice que estamos muy lejos de alcanzar el objetivo.

La ley fue concebida en el marco de la corresponsabilidad Estado-Sociedad. De tal manera que la misma obliga a toda la sociedad venezolana; obligación que nos parece prioritaria de cara a los reclamos de las mujeres y a los compromisos internacionales asumidos por la República Bolivariana de Venezuela. Compromisos por los que el Estado es sometido a revisión, de conformidad con instrumentos, tales como el Protocolo Facultativo de Seguimiento de la CEDAW.

A cinco años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, forzoso es reconocerlo, la corresponsabilidad no ha sido entendida ni asumida como la plataforma de actuación y concreción de tan importante instrumento legal por parte del Estado, sus instituciones y el resto de la sociedad.

Ahora bien, el patriarcado venezolano, que goza de inmejorable salud, ha enfilado una y otra vez sus baterías contra la Ley y, en algunos casos, contra las feministas de manera expresa.

Hacemos memoria de algunos programas radiales y televisivos²⁰ que cuando refieren la ley la consideran excesivamente punitiva, achacándole a su aplicación una infinidad de males. Le achacan, incluso, el hacinamiento carcelario que nos ha expuesto negativamente ante la comunidad internacional. El propósito es debilitar y acabar con el único instrumento

²⁰ Para ampliar recomiendo ver en www.elidaaponte.blogspot.com el derecho a réplica que me diera el apreciado entrevistador Ernesto Villegas en un programa transmitido por Venezolana de Televisión.

legal que ha puesto al descubierto una realidad que nos golpea de manera brutal: la violencia machista es el primer problema que confrontamos las mujeres en Venezuela. La misma es el resultado de una discriminación histórica no superada y frente a la cual no existen políticas públicas, por lo que día a día aumenta el número de nuestras hermanas que pierden sus trabajos, su integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, jurídica y hasta la vida, como resultado de tan mortal epidemia. Algunas expertas afirman que la impunidad supera el 92% de los casos denunciados.

La campaña en contra de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es sistemática y proviene de varios sectores: políticos, partidistas, económicos, académicos, comunicacionales, religiosos, espacios institucionales y no institucionales, públicos y privados, sustentados todos en el poder patriarcal o puestos a su servicio. Y ante esa campaña vil es necesario responder con todos los recursos de los cuales dispongamos, desnudando con palabras claras y directas, de fácil y popular intelección, ese poder que agrede, ofende, desvaloriza, somete, subordina, difama y hasta ridiculiza a más del cincuenta por ciento de la población, constituida por las mujeres. Sí, porque todas las mujeres somos víctimas históricas de la discriminación y potenciales víctimas de los tipos de violencia recogidos en la ley.

Para corroborar la anterior afirmación basta con revisar la gran cantidad de denuncias que por violencia psicológica (Art. 39), acoso u hostigamiento (Art. 40) y acoso sexual (Art. 43) contra las mujeres, acaecidas en los distintos espacios de la Administración Pública, se apretujan en los archivos inmanejables del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social²¹.

En los espacios del poder judicial y en las universidades, por ejemplo, estos delitos se propagan como la verdolaga²², según lo demuestran los casos que nos llegan a la Red Venezolana sobre Violencia contra las Mujeres (REVIMU) y experiencias personales. Y ante los mismos, se exige una respuesta institucional contundente, pues es lo único que puede parar al acosador para que no logre su cometido de desprestigiar a la víctima, obligarla a que abandone su trabajo o inducirle al suicidio, como acontece en el caso del acoso laboral u hostigamiento.

²¹ Aspiramos que ambas figuras sean previstas en la anunciada Ley Orgánica del Trabajo, con sanciones administrativas ejemplarizantes.

²² Planta herbácea de muy fácil reproducción en nuestro país.

V. NUDOS GORDIANOS PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Analizaremos a continuación, algunas situaciones relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales no sólo debilitan y hacen nugatorio su objetivo, sino que avivan el reclamo de las mujeres por la justicia que reclaman, ante organismos internacionales y las organizaciones comprometidas con la defensa de sus derechos humanos, tales como la REVIMU.

1. Las instituciones públicas comprometidas con la efectividad de la Ley, no han asumido las obligaciones que les impone el Capítulo IV de la misma

El Estado venezolano no se ha puesto a tono con la ley, generando con su incumplimiento una serie de deficiencias no superadas; mismas que no pueden ser achacadas a las mujeres víctimas de la violencia machista.

Las mujeres agredidas no pueden ser responsabilizadas de las deficiencias de la administración pública y del Estado. Un buen ejemplo de esas deficiencias es la no aplicación e implementación del Capítulo IV de la ley.

Si hay un capítulo que tiene relevancia para asegurar la eficacia de la Ley y que sigue siendo una asignatura pendiente, a cinco años de su entrada en vigencia, es el Capítulo IV, referido a las Políticas Públicas de Prevención y Atención, lo que la hiere de muerte y la convierte en mero instrumento formal punitivo.

Según el capítulo mencionado, los órganos de la Administración Pública, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deben elaborar o diseñar políticas públicas de prevención y atención, con el fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y las garantías consagradas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Art. 16). En otras palabras, la misma ley obliga al Estado y a la sociedad con fundamento en la corresponsabilidad establecida en el artículo 18, ejusdem. Y, especialmente, al Instituto Nacional de la Mujer, Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Ministerio con competencia en educación y deporte, Ministerio con competencia en educación superior o universitaria, Ministerio con competencia del interior y justicia, Ministerio con competencia en salud, al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, a los Estados y Municipios, al Ministerio del Poder

Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y al Instituto Nacional de Estadística.

Las políticas públicas, que no son más que las respuestas asertivas que deben elaborar los ministerios, órganos e instituciones comprometidas para asegurar los derechos y garantías que la ley prevee para las mujeres y los derechos constitucionales de los agresores, no quieren ser pensadas, diseñadas ni asumidas por los entes comprometidos, expresamente obligados en el Capítulo IV de la Ley, in comento. A lo sumo son mencionadas de manera espasmódica. O, como diría una amiga mía falconiana²³, para no quedar fuera de foco. En otras palabras, son mencionadas en el marco del lenguaje políticamente correcto, sin asidero científico, carentes de compromiso real. No hay políticas públicas, con perspectiva de género, en Venezuela, como tampoco existen registros ni estadísticas oficiales²⁴. Y ello, no es inocente ni desinteresado.

Acusamos la necesidad de que el tema de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela sea pensado como un asunto de interés nacional, sobre el fundamento de la transversalidad de género que se requiere para una comprensión integral y política, en el más estricto sentido, si es que queremos deconstruir esa violencia y producir nuevos aprendizajes en el ser humano, transformando con ello una sociedad, nuestra sociedad. Un pedimento bastante difícil de satisfacer porque el mismo pone en cuestión dos asuntos predefinidos y preasignados: el PODER y el control sobre las mujeres, que descansan en las manos de los hombres y, en consecuencia, sirven a los intereses masculinos.

Esto lo puedo afirmar no sólo con la experiencia de mi hacer feminista y universitario, sino porque asesoré al Instituto Nacional de la Mujer y, además, tuve la oportunidad de desempeñarme por unos meses, primero como Directora Estratégica del Ministerio de Asuntos de Estado para la Mujer y luego como Viceministra para la Transversalidad Política de Género del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. De igual manera actué como Delegada por Venezuela en algunos escenarios internacionales, tales como: en la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cincuenta y una Reunión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Organización de Naciones Unidas²⁵, y en la Primera

²³ Perteneciente al Estado Falcón. Zona norte del país, a orillas del Mar Caribe, inmenso y lleno de misterios.

²⁴ A excepción de la estadística presentada cada año por la Fiscalía General de la República y que no es suficientemente socializada. Es una estadística parcial.

²⁵ Lastimosamente estos espacios así como las Misiones Diplomáticas de nuestros países, contrario a lo que se piensa, no cuentan con mujeres feministas para abordar los nuevos temas del empoderamiento y posicionamiento de las mujeres.

y Segunda Reunión de Mujeres de los Países de la ALBA-TCP; experiencias y aportes que se encuentran recogidos en distintos materiales.

Desde la posición de Viceministra y con el apoyo de María León como Ministra, hicimos un inventario de las necesidades más urgentes de las mujeres en todos los Estados de Venezuela, sobre aspectos tan importantes como: la salud, la educación, la situación de las mujeres privadas de libertad, la situación de las mujeres afrodescendientes e indígenas, la situación de las mujeres campesinas y, especialmente, sobre el río subterráneo que los recorre a todos, cual es la violencia machista.

Ese trabajo, en el cual participaron comisiones del Ministerio y las Direcciones estatales, puso de manifiesto que la violencia contra las mujeres, era el primer problema de salud pública y, como tal, reclamaba una atención urgente.

La situación fue identificada como objeto de la acción colectiva y abonó la propuesta de adelantar desde el Viceministerio a mi cargo, las mesas conjuntas con el resto de Ministerios y otras instancias del poder público, con el fin de elaborar o diseñar políticas que dieran respuesta a las necesidades planteadas por las mujeres y, especialmente, de cara al Capítulo IV de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La elaboración de las políticas públicas es una atribución prevista en el Decreto 6663²⁶, a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, sin olvidar que no es al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género a quien corresponde su ejecución.

En relación a la iniciativa anteriormente señalada, a pesar de que se cumplieron todas las formalidades para su concreción, no se obtuvieron los resultados que se esperaban, por varias razones. Una de ellas fue que los Ministerios convocados, en las mesas que logramos instalar como la mesa conjunta con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, no enviaron a las mismas un personal con facultades decisorias y, el que enviaron, manifestó que el Ministerio carecía de programas con perspectiva feminista.

Las compañeras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, aunque estaban animadas por la mejor voluntad, no tenían ninguna formación sobre los temas propuestos en la mesa²⁷, por lo que el objetivo fue frustrado. Y aunque la estrategia del Viceministerio a mi cargo estaba diseñada para abordar las temáticas con el ABC conceptual feminista en correspondencia con los objetivos perseguidos, fortaleciendo la iniciativa con la incorporación a las mesas de varias mujeres, expertas en salud

²⁶ Decreto que crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, cuya versión redacté y que hoy se encuentra abandonado en su espíritu, propósito y razón, y en la mayoría de las competencias que contiene.

²⁷ Violencia contra las Mujeres, Violencia obstétrica, Protocolos de atención, VIH-Sida, etc.

integral y en otras áreas del conocimiento; las funcionarias que el Ministerio de la Salud designó, nos manifestaron con absoluta sinceridad, que el mismo no tenía programas con la perspectiva que nosotras invocábamos. De hecho, nos confiaron que no habían pensado las necesidades que las mujeres manifestaron en el inventario levantado y que, además, carecían de la atribución decisoria para tratar cualquier propuesta sobre políticas públicas con perspectiva de género, en la mesa correspondiente.

Siendo nugatorio y cuesta arriba²⁸, entonces, concretar estas mesas interministeriales, lo que hubiese permitido diseñar políticas, evaluarlas y monitorear su ejecución, dimos inicio a algunas propuestas que nos parecían fundantes y menos ambiciosas en el tiempo²⁹. Así por ejemplo, en el marco de la Ley Orgánica de Educación en la que habíamos logrado incluir desde el Viceministerio el principio de igualdad de género, con el apoyo de la Diputada María de Queipo en la Asamblea Nacional³⁰, nos dimos a la tarea de elaborar, con la participación de pedagogas e ilustradoras al efecto, el primer libro de lectura y escritura, con igualdad de género, para niñas y niños de los primeros años de educación formal, el cual me encuentro revisando nuevamente para ver si se materializa la publicación, a cargo de las instancias ordenantes.

Estas experiencias en el Poder Ejecutivo y otras en el Poder Judicial, durante mi desempeño como Jueza de Juicio, en el Circuito Judicial Penal de Violencia contra las Mujeres en el Estado Zulia, tales como la promoción y creación de una Unidad de Policía sobre Violencia contra las Mujeres en la Policía Municipal de Maracaibo (POLIMARACAIBO), con el apoyo de Francisco Delgado, Director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo, excelente criminólogo zuliano y el Comisario José González, recientemente asesinado, me han convencido de que la atención de la violencia contra las mujeres deben ser asumidas como objeto de la acción colectiva si es que queremos dar pasos sostenidos en el tiempo en pro de su prevención, sanción y eliminación.

La unidad policial creada en POLIMARACAIBO, por ejemplo, nos permitió formar a quince funcionarias y funcionarios, obteniendo excelentes resultados en relación a las tareas que se le encomendaron, con muy buena receptividad y opinión favorable de las mujeres víctimas de violencia que fueron usuarias de sus servicios y atención. Algunas mujeres

²⁸ Ausencia de apoyo político.

²⁹ En el ejercicio de cualquier cargo público debemos tener presente que es necesario avanzar, lo más que podamos, en el tema de los derechos humanos de las mujeres; aunque el patriarcado siempre logrará su reacomodo cuando el Estado no está comprometido a fondo con el cambio de los patrones culturales y la construcción de una nueva sociedad no machista, no sexista y no excluyente.

³⁰ Aunque no logramos incluir que se hablara de coeducación que es lo correcto.

salvaron sus vidas por la actuación oportuna de esta unidad policial y ello fue el logro más significativo.

Las anteriores experiencias y otras que no se pueden recoger en esta contribución, abonan la idea sobre la necesidad y la urgencia de que el Estado implemente políticas públicas, así como programas, planes, proyectos y otras iniciativas que propendan a la prevención, información, asesoría, atención, sanción, erradicación y eliminación de la violencia contra las mujeres y, en general, que materialicen los derechos humanos que el ordenamiento jurídico nos consagra. Tales iniciativas no pueden ser interdictadas por el sector público, exclusivamente. Sin embargo, no se pueden diseñar estas políticas ni ejecutarlas, desde empapelados escritorios, con la inspiración diagnóstica del ojo bizco sobre la situación de las mujeres, mirando siempre al interés masculino y sin la experticia feminista requerida.

Es imposible elaborar políticas públicas feministas y socialistas, sin feminismo socialista o sin socialismo feminista³¹, como se prefiera decir, aunque a estas alturas, creo que el orden de los factores sí altera el producto, en perjuicio siempre de las mujeres.

Incluso, tales políticas deben someterse a la estadística y a la medición de resultados con indicadores adecuados para superar esta sensación de orfandad y de abandono que experimenta el Pueblo-Mujer cuando revisamos los asuntos de mayor gravedad que lo aquejan como colectivo y que son el producto del trato que recibimos desde las instancias del PODER, siempre vistas y tratadas como las otras, las heterodesignadas, las idénticas pero no iguales y, en definitiva, tratadas como ciudadanas de segunda categoría.

En el articulado de las políticas públicas de prevención y atención, contenido en el Capítulo IV de la Ley que venimos comentando, hay asuntos que deben ser declarados prioritarios por las instancias públicas que correspondan; asuntos que, al no ser atendidos, nutren y refuerzan la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en materia de Educación, es necesario elaborar una política que sirva de marco a los planes, proyectos y programas de estudio en todos sus niveles, que promuevan la igualdad de género y la superación de los estereotipos culturales andrárquicos que marcan las interrelaciones humanas en nuestra sociedad. La educación que se reciba en la familia y en la escuela, desde los primeros años de la infancia, debe transmitir modelos de igualdad y encuentro paritario en el trato de madres y padres, entre sí y en relación con las hijas y los hijos, sin preferencias, exclusiones, ni discriminaciones.

En esta materia, como feminista militante y universitaria, me

³¹ Según el discurso oficial que tomó mucha fuerza en el segundo semestre del año 2008 y primer semestre del año 2009.

preocupa que las propuestas que se están elaborando de la nueva Ley de Universidades, evadan el tema de la transversalidad feminista y el principio de igualdad de mujeres y hombres. Desde la Universidad del Zulia y, especialmente, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, espacio universitario avocado desde el año 1990³² a formar al alumnado de Derecho, en pre y postgrado, sobre el tema de los Derechos Humanos de las Mujeres y sobre la prevención y erradicación de la Violencia Machista, hemos elevado nuestra solicitud escrita para que se cumpla en los nuevos diseños curriculares con la exigencia legal contenida en la Ley Orgánica de Educación, pero aún no hemos obtenido una respuesta satisfactoria.

2. El posicionamiento teórico pertinente: feminismo, feminismo y más feminismo

Una debilidad en pro de la eficacia de la ley está referida a la ignorancia. Ignorante es quien ignora. Yo ignoro muchísimas cosas. Todas y todos ignoramos muchísimas cosas. Incluso, las cosas que ignoramos, son superiores en número a las que conocemos. ¡Ah!, la sabia frase socrática: “yo sólo sé, que no sé, lo que no sé”, cargada de verdad. Y la verdad no es otra cosa que humildad, en palabras de Teresa de Ávila. Pero cuando la ignorancia se une a la soberbia, a la autosuficiencia y al ánimo de figurar, entonces se convierte en un prejuicio insoslayable muy difícil de superar. La ignorancia impide la conciencia.

Esto lo afirmo porque en algunos espacios existe una tendencia interesada en obviar lo que es obvio: si el feminismo es el que ha dado respuesta, contenido, explicación, conceptualización y categorización al tema de los derechos humanos de las mujeres y, especialmente, al tema de la violencia machista como un tipo específico de violencia, con un carácter estructural³³, entonces, ¿porqué existe tanta resistencia a que las feministas³⁴ hagan sus aportes, productos no sólo del estudio y la investigación sistemática sino de una militancia que les sirve de justificación ética?.

El Feminismo, para ejemplificar la violencia contra las mujeres como un tipo especial y mostrar de manera contundente su carácter estructural, tuvo que activar un mecanismo crítico de irracionalización y de inmoralización de determinado tipo de prácticas para poder desembocar en un

³² Cuando fueron creados Los Estudios de Género.

³³ E. Aponte Sánchez, “Claves epistemológicas de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia...” *cit.*, p. 123.

³⁴ Sin discriminaciones odiosas.

mecanismo de generalización y así aportar los conceptos adecuados que permiten “pasar de la anécdota a la categoría”³⁵.

Es el feminismo el que ha alumbrado el dato empírico con su teoría, en todas las ciencias y ha realizado el trabajo de conceptualización, generalización y categorización necesarias para poner de manifiesto el patriarcado. Sí, el patriarcado como modo de dominación de los hombres sobre las mujeres tiene efectos sistémicos y se comporta como un macro poder y como un micropoder.

En su tarea, el feminismo ha deconstruido ese sistema de dominación en un trabajo extraordinario que llena bibliotecas enteras, desde la década de los años setenta del siglo pasado, aportando con su teoría crítica la única alternativa que nos permitirá transformar esta sociedad y hacer realidad la igualdad sustantiva, material, concreta o, si lo preferimos, la justicia, que es el norte de cualquier democracia.

En otras palabras, a través del trabajo científico feminista se ha podido clarificar conceptualmente, y la clarificación conceptual siempre tiene implicaciones políticas. Los conceptos críticos que aporta el feminismo hacen posible la visibilización de fenómenos que no se pueden percibir desde otras miradas de atención y, al mismo tiempo, como señala la filósofa Celia Amorós³⁶, esta visibilización nutre y posibilita nuevos conceptos críticos.

En el mismo orden de ideas, la Teoría Feminista es el único marco interpretativo pertinente para determinar la visibilidad y la constitución en hechos relevantes de fenómenos y acontecimientos que afectan a más del cincuenta por ciento de la población venezolana constituida por las mujeres y que no son pertinentes ni significativos desde otras orientaciones de la atención.

Siendo la teoría feminista como es, *crítica*, en sentido estricto, es esa visibilización la que permite poner de manifiesto los sesgos patriarcales, sesgos no legítimos, sesgos que alimentan las orientaciones ciegas a los fenómenos que irritan nuestras sensibilidades como es el caso de la violencia machista. Pero el feminismo no se agota con aportar el marco interpretativo, aporta también el marco reivindicativo, por lo que compartimos la afirmación³⁷ de que el feminismo aporta así dos prácticas que se complementan perfectamente o políticas: las políticas reivindicativas y las políticas de redefinición o elaboración de los marcos

³⁵ C. Amorós, *Tiempo de Feminismos. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad*, Colecc. Feminismos, Ediciones Cátedra S. A., Madrid, 1997, p. 26.

³⁶ C. Amorós, *Tiempo de... cit.*

³⁷ A. de Miguel, “La violencia contra las mujeres. Tres momentos en la construcción del marco feminista de interpretación”, *ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política*, n° 38, Madrid, enero-junio 2008, pp. 135-136.

teóricos de reinterpretación de la realidad o praxis cognitiva que permiten o suponen la adquisición de un nuevo marco de referencia. Las feministas muestran una realidad ciertamente distinta de la que percibe la mayor parte de la gente.

Nosotras no hacemos anécdota, hacemos ciencia militante, porque esa ciencia está comprometida, sin condiciones, con la liberación definitiva de las mujeres. Esto lo digo porque hay sectores que se muestran resistentes a dar paso a la Teoría Feminista. Incluso, muchas veces nos encontramos con expresiones como: “nos interesan los derechos humanos de las mujeres pero no compartimos los planteamientos feministas”, y otros sectores que están apareciendo últimamente que utilizan el lenguaje feminista pero que les agradaría que el feminismo pudiera existir sin mujeres feministas, como una masa amorfa donde quepa todo. Frente a tales propósitos es necesario unirnos para deslegitimar³⁸ dentro y fuera de nosotras mismas un sistema que se ha alimentado y sustentado sobre el axioma de nuestra inferioridad y de nuestra subordinación al deseo e intereses masculinos.

En este punto afirmo que no podemos construir la justicia desde ningún espacio de la sociedad venezolana sin la asunción del feminismo como marco de conceptualización, categorización y sistematización de los fenómenos que abordemos, con el objetivo de transformarla. Una sociedad que discrimina a las mujeres sólo por el hecho de ser tales, ahíta de violencia patriarcal. Y en este punto hay que cuidarse de aquellas y aquellos que con informaciones peregrinas, sin haber leído ningún texto completo de teoría jurídica feminista, conocidas y conocidos por ello como intelectuales mediáticos, formadas y formados en el positivismo y con absoluto desconocimiento de las experiencias, las ideas, las pasiones, las luchas, la sororidad, los reclamos, la historia, los aportes de las mujeres y el nuevo paradigma forjado por la ciencia feminista (que subestiman), pretenden constituirse en el oráculo de sabiduría de las problemáticas que durante siglos nos han ocupado y, especialmente, de la violencia machista. La ignorancia es audaz.

Bienvenidas y Bienvenidos todas y todos quienes quieran unirse a la lucha pero ¡cuidado! con los franquiciados y las franquiciadas que obtienen enormes ganancias a costa del dolor, el abandono institucional y la muerte de las mujeres víctimas de violencia, al desatender, ignorar u obstaculizar sus reclamos de justicia. Y a costa del camino que han construido las feministas.

³⁸ Hablo, en algunos de mis artículos, del proceso de exorcismo de demonios.

3. El flagelo de la corrupción utiliza todos sus recursos

Una de las críticas más insistentes al poder judicial a finales de la década de los noventa del siglo veinte en Venezuela, y al resto de organismos que confluyen en el proceso penal, fue la corrupción. Incluso, fue este flagelo el que sustentó aquel Decreto de intervención del poder judicial³⁹, en el marco de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que conllevó a la destitución y al pase a la Comisión Disciplinaria de muchas juezas y jueces, en una experiencia inédita en el país.

Hoy, el tema de la corrupción del Poder Judicial y de otros poderes sigue vigente. Hace pocos días nuestro país y el mundo quedaron atónitos por las declaraciones de un ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, quien había sido incluso, Presidente de la Sala Penal⁴⁰.

La jurisdicción de violencia contra las mujeres, la Fiscalía del Ministerio Público y los órganos receptores de denuncias, no son ajenos a estas prácticas, según lo denuncian insistentemente las mujeres víctimas de violencia, en varios Estados del país.

A la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU) han llegado varias de esas denuncias y reclamos de las mujeres víctimas de violencia en relación a las prácticas corruptas que están vaciando a la jurisdicción y a otras instancias del contenido que le impone la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una corrupción que se inicia desde el momento en que la víctima formula la denuncia, favoreciendo al hombre adinerado, al poderoso, al influyente, al que puede comprar las conciencias, los procedimientos, las investigaciones y las decisiones.

Supuestamente, se da en estos casos una triangulación perfecta entre: órgano receptor, órgano fiscal, abogado defensor o abogada defensora y juez o jueza, para favorecer al agresor. Algunas de tales decisiones, supuestamente son elaboradas en los bufetes que defienden a los mismos imputados.

³⁹ En dicho proceso participé como Jurada Nacional de Jueces y Juezas, seleccionada por el Tribunal Supremo de Justicia para la evaluación y los concursos de oposición en el Poder Judicial. Los concursos fueron abandonados por el Tribunal Supremo y las designaciones volvieron al viejo sistema, es decir, haciéndose a dedo, que es como los grupos de poder pueden tener el control de los jueces y las juezas, de sus sentencias y de los beneficios que obtienen.

⁴⁰ Este juez tuvo en sus manos el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni y declaró que su decisión desfavorable a la enjuiciada, había sido el resultado de órdenes políticas provenientes del Ejecutivo Nacional. Por cierto, una excusa nada convincente por parte del inmoral juez, para justificar el total abandono del derecho y de la ética profesional debida y jurada, en contra de la enjuiciada, clara víctima de la violencia institucional y de la violencia sexista.

Una mujer afirmaba el otro día en REVIMU que algunas fiscalas y fiscales del ministerio público se comportan como si fueran las abogadas y los abogados defensores de los sujetos agresores, llegando al extremo, incluso, de llamar telefónicamente a la mujer víctima para amedrentarla, con el fin de que abandone el procedimiento o no se presente durante el mismo.

Algunas usuarias de la justicia, refiriéndose a este tema, afirman que existen acuerdos de muy alto monto⁴¹, algunos de ellos convenidos en moneda extranjera para favorecer a determinados agresores. Agresores que prevalidos de sus recursos económicos, influencias, posiciones de poder, investiduras, fueros o manos amigas poderosas se hacen intocables para la justicia. El tema debiera ser investigado por los organismos a quien corresponda; lo que pedí en mi última conferencia impartida en el Tribunal Supremo de Justicia (2011).

En otras palabras, las mujeres denuncian que se orienta el aparato policial, judicial, fiscal, abogadil y de defensoría pública para que el agresor, el presunto criminal machista no sea trastocado por la ley en sus intereses ni en su libertad, dejando a la víctima en sus manos, acrecentándose con tal comportamiento, la impunidad, la indefensión y hasta los femicidios de las mujeres. Ello nos lleva a advertir que si esa corrupción no es atacada a tiempo, todo el esfuerzo en pro de la eficacia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia puede estar a las puertas de una misa para difunta.

Estaríamos, en el supuesto expresado, ante una situación no sólo de violencia machista sino de innegable discriminación y violencia clasista, por la que sólo son y serían investigados, procesados y sancionados los presuntos agresores pobres, sin recursos económicos para la contratación de defensoras o defensores enchufados con las instancias del poder.

El riesgo de esta situación de corrupción, no sólo es la negación de la justicia que reclaman las mujeres víctimas de violencia y el aumento de la impunidad, sino la utilización de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la institucionalidad que ella crea, como si fuera una franquicia que rendiría unas jugosas ganancias⁴² a quienes se encuentran inscritas o inscritos en ella, por pertenecer a alguna institución, involucrada en el recorrido que se da, desde la denuncia hasta la sentencia definitiva del caso.

⁴¹ Algo bastante difícil de probar, a menos que se haga un riguroso seguimiento a la funcionaria o funcionario cuestionados.

⁴² O prestigio innmerecido de cara a la galería.

4. Una corriente doctrinaria peligrosa

Otro peligro, que se anuncia como un nudo difícil de resolver, es el posicionamiento de una corriente que se puso de moda en los años sesenta del siglo pasado, de la mano del interaccionismo simbólico, que propuso un nuevo enfoque del sujeto presuntamente agresor y que se conoce con el nombre de teoría de etiquetaje. Este posicionamiento, que está tomando nuevamente cuerpo en la temática del castigo o penalización de los delitos de violencia contra las mujeres, sobre todo, en Venezuela, supone una inversión de la imagen positivista del desviado. En tal teoría, éste deja de ser el peligro social número X para ser considerado “una creación y víctima del control social” por lo que frente al enfoque correccional se impone una nueva actitud de escuchar, comprender sus razones y hasta “simpatizar” con el agresor.

En los años sesenta, la teoría de etiquetaje elevó la imagen del desviado a rebelde político, lo supiera, asumiera o no; transgresor del orden capitalista y la moral burguesa. Este contexto “descriminalizador” que de manera sutil pareciera ganar cada día más adeptos y adeptas sobre todo cuando nos adentramos al tema penitenciario, busca impedir que el movimiento feminista reivindique el uso ejemplar y disuasorio del derecho penal en los casos de los delitos previstos en la Ley⁴³ y esto, créanme sinceramente, puede vaciar a la ley del contenido criminal que es uno de sus aspectos y repetirse, con ello, la misma situación que vivimos con la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Es decir, de una ley que fue *debut y despedida*.

De hecho, en algunos órganos receptores de denuncia, a los cuales las mujeres acuden sin encontrar respuesta satisfactoria, se está implementando la práctica no prevista en la ley, de servir el mismo órgano como intermediario para provocar que la mujer desista de su decisión de denunciar o proseguir el trámite y se avenga, por vía de conciliación, a las propuestas del sujeto agresor. O, tener que hacerlo, porque no se tomen las medidas de protección, necesarias y urgentes, para garantizarle los derechos que la misma ley le establece. Por cierto, muchas de ellas mueren en manos de sus agresores y feminicidas. De lo dicho se deduce que es urgente crear un sistema de evaluación de los órganos receptores de denuncias que de cuenta del cumplimiento de las obligaciones que la ley les impone, estableciendo las responsabilidades civiles, administrativas y penales, en cada caso.

La institucionalidad que prevé la Ley Orgánica sobre el Derecho de las

⁴³ E. Aponte Sánchez, “Justicia penal: la otra mirada”, *Revista Capítulo Criminológico*, vol. 30, n° 3, Julio-Septiembre, Instituto de Criminología-LUZ, Maracaibo, 2002, p. 56.

Mujeres a una Vida Libre de Violencia es una asignatura que no puede seguir pendiente. Es por ello que desde las instancias del poder público debe exigirse a los gobiernos regionales y municipales, muchos de ellos en mora legal desde el 16 de marzo de 2008 (Disposición Transitoria Cuarta de la Ley), que creen los Institutos Regionales y Municipales de las Mujeres. Ellos están obligados a diseñar, articular y ejecutar políticas públicas, programas, planes y proyectos que den respuestas satisfactorias a los reclamos y a las necesidades de las mujeres, víctimas de violencia.

Deben crearse las Casas de Abrigo u otra alternativa de resguardo de las mujeres en peligro inminente de perder la vida, como consecuencia de la violencia machista. Digo Casas de Abrigo u otra alternativa que sirvan, al mismo tiempo, para la formación, el empoderamiento y la organización de las mujeres usuarias, así como las Defensorías Municipales de las Mujeres, las Defensorías Comunitarias de las Mujeres⁴⁴, las unidades policiales especiales de respuesta inmediata en los casos de violencia contra las mujeres, tanto en las Policías Regionales, las Policías Municipales y en la Policía Nacional, y otras iniciativas. Algunas de ellas las hemos comenzado a implementar en el Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia por medio del Proyecto de Investigación: “Fortaleciendo las iniciativas municipales en pro de la igualdad real de las mujeres y los hombres o igualdad de género” (CONDES-LUZ, 2011-2012)

De igual manera, urge consolidar las cifras oficiales que den cuenta de la violencia contra las mujeres en Venezuela para poder hacer diagnósticos apropiados de la aplicación del ordenamiento jurídico aplicable y la respuesta institucional a dicha problemática.

VI. CONCLUSIÓN

No quisiera terminar esta colaboración dejando el mal sabor de constituirse en una lista de quejas. En Maracaibo, durante el IV Encuentro Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, IV Seminario sobre el Género en la Investigación de las Ciencias y Primer Encuentro Regional de Defensorías Comunitarias de Mujeres, realizados de manera simultánea⁴⁵

⁴⁴ Esta formación es uno de los proyectos que adelanta la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU), en coordinación con “Los Estudios de Género del Instituto de Filosofía del Derecho” de la Universidad del Zulia y el Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas-Venezuela. Proyecto que está bajo mi coordinación como contraparte.

⁴⁵ Promovidas y coordinadas por Los Estudios de Género del Instituto de Filosofía del

durante los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2011, en Maracaibo, se hicieron varios anuncios de gran importancia para las mujeres y el entrelazamiento institucional que la ley reclama: a) el Colegio de Abogados del Estado Zulia, por voz de su Presidente, anunció la creación de la Unidad de Asesoría de las Mujeres Víctimas de Violencia, b) el Hospital Universitario, por voz de su Directora, anunció la creación de la Unidad Hospitalaria de atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, como centro piloto para la consolidación de una futura red hospitalaria de atención en el estado Zulia y, c) fue anunciado, igualmente, la elaboración del Primer Protocolo de Atención Primaria de Mujeres Víctimas de Violencia, en Hospitales y Centros de Salud por parte del personal médico del Hospital Dr. Adolfo Pons, con sede en Maracaibo. Todos estos anuncios endulzan nuestra lucha, siendo los mismos el resultado de expresas solicitudes que hicieran Los Estudios de Género del Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad del Zulia y la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU), mismos que tendrán a su cargo la formación correspondiente.

Otros muchos asuntos quedan en el tintero, muestras de los escollos que es necesario superar para lograr los objetivos propuestos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la normativa concordante. Algunas señas de esos asuntos podemos resumirlos así: a) la renuencia en el uso del lenguaje no sexista en las actuaciones administrativas y judiciales, obviando con ello el lenguaje oficial que exige la Constitución de 1999 e invisibilizando a las mujeres; b) las deficiencias en la formación con perspectiva feminista de nuestras egresadas y egresados universitarios, lo que debilita la exigencia de la interdisciplinariedad propuesta por la ley; c) la ineficiente formación del funcionariado que tiene que ver con todo el tema de la denuncia y la investigación sobre la materia que nos ocupa; d) la renuencia por parte de las operadoras y los operadores de la justicia de vincular la realidad social con las soluciones jurídicas que promuevan la transformación de esa realidad, de cara a los derechos humanos de las mujeres⁴⁶; e) la renuencia a asumir los aportes de las feministas del derecho y la práctica que se está haciendo costumbre de no citarlas en las sentencias. Ello es un claro ejercicio de invisibilización, no reconocimiento y patriarcado. Es decir, de violencia machista.

También queda en el tintero el mensaje sexista de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo de los visuales y la poca contribución

Derecho de la Universidad del Zulia, la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer (REVIMU), la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad del Zulia y otras organizaciones, comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

⁴⁶ E. Aponte Sánchez, "La justicia que reclamamos las mujeres: prolegómenos", *Revista Labrys. Études Féministes*, Julio-Diciembre, Brasil, 2008, p. 12.

que están haciendo para cambiar los patrones socioculturales que condenan a las mujeres a la discriminación y a la violencia; una violencia que nos diezma en todo el planeta.

TITLE

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN VENEZUELA: THE INSTITUTIONAL RESPONSE

SUMMARY

I. INTRODUCTION.- II. VENEZUELA EXCEPTIONAL LIVES TIME CALLED REV.- III. THE CONSTITUTION OF 1999 AS DOORWAY OF FEMINISM AND WOMEN, THE NEW REPUBLIC.- IV. HOW WE GOT TO THE ORGANIC LAW ON THE RIGHT OF WOMEN TO A LIFE FREE OF VIOLENCE?.- V. GORDIAN KNOTS FOR IMPLEMENTATION OF THE ORGANIC LAW ON THE RIGHT OF WOMEN TO A LIFE FREE OF VIOLENCE: 1. Institutions committed to the enforcement of the Act have not assumed the obligations under Chapter IV of the same. 2. The relevant theoretical position: feminism, feminism and feminism. 3. The scourge of corruption used all its resources. 4. A dangerous current doctrine.- VI. CONCLUSION.

KEY WORDS

Women; Men; State; Violence; Sexism; Feminism; Democracy; Venezuela.

ABSTRACT

When talking about the issue of violence against women, especially if our training is legal, we tend to confront the law in force with the content of the acts and statements emanating from the organs of complaint, investigation and jurisdiction. However, working with women in the community, with the networks that are responsible for providing advice and assistance to victims in pursuit of justice, the irreplaceable relationship with the woman on the street, or potential user of the institutional framework created, the statistics that shed some organs involved in the matter, give us another vision. This vision goes beyond the purely legal issue to locate in the political and especially the issue of power, giving us tools to detect the anchors of patriarchy in its efforts to strengthen the impunity or revealing,

perhaps, which is against the stage of power and deviations, which must confront the problem before us to understand how we have progressed or not, the issue of violence against women, in a given country, in this case, in Venezuela, and the model displaying to the world democracy.

Fecha de recepción: 03/06/2012 Fecha de aceptación: 08/07/2012

